UNA LEY FUNDAMENTAL PARA LA IGLESIA

1. *Hacia una ley fundamental de la Iglesia.*

Desde hace algunos años van apareciendo de vez en cuando noticias, procedentes de fuentes diversas pero todas ellas muy autorizadas, acerca de un proyecto legislativo relacionado con el Derecho Constitucional de la Iglesia. Pablo VI aludió a él en un discurso¹. Más tarde se publicaron informaciones sobre la labor desarrollada por la Comisión Pontificia para la revisión del Código de Derecho Canónico, encaminada a concretar la idea en un proyecto de ley². La cuestión fue objeto de atención por parte del Sínodo de los Obispos, a propósito de la discusión sobre los principios directivos que han de presidir la reforma del Código³. Finalmente, en la sesión plenaria de la Pontificia Comisión para la revisión del Código, celebrada el 28 de mayo de 1968, los Emmos. Cardenales miembros de la Comisión se ocuparon también del tema⁴.

1. En el discurso dirigido a la Comisión Pontificia para la revisión del «Codex Iuris Canonici» el 20 de noviembre de 1965 se encuentran estas palabras: «Peculiaris vero hic existit quaestio aequae gravis, eo quod duplex est Codex Iuris Canonici, pro Ecclesia Latina et Orientali, videlicet num conveniat commune et fundamentalem condi Codicem, ius constitutum Ecclesiae continentem». Cfr. A. A. S., 57 (1965), p. 988.

2. Cfr. por ejemplo, la información titulada *I lavori della Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, aparecida en «L'Osservatore romano» el 9 de abril de 1967.

3. «L'Osservatore romano» informó sobre los trabajos del Sínodo relativos a los principios directivos para la revisión del Codex durante los primeros días de octubre de 1967. En el número correspondiente al 6 de octubre, el periódico vaticano publicó una amplia reseña de la conferencia de prensa en la que el Cardenal Urbani trató de los problemas fundamentales relativos a la reforma del Derecho Canónico. En esta reseña se dice, a propósito del tema que nos ocupa:

«Un Codice solo per tutta la Chiesa? oppure due o più Codici, uno per la Chiesa Latina e gli altri per le Chiese Orientali? Dalle oposte tesi, sostenute con calore da ambo le parti, si conclude che la tesi dell'unico Codice non sembra ancora del tutto matura. Quasi tutti convengono sull'opportunità che si elabori una Legge fondamentale dalla Chiesa, preambulo al Codice.

Una commissione composta di teologi e giuristi da tempo sta elaborando in proposito un progetto. Le difficoltà sono molte. I membri del Sínodo sono stati invitati a prestare la loro collaborazione in scritto, magari durante questo mese» (n. 3).

4. Cfr. la información: *Adunanza della Pontificia Commissione per la revisione*

Estas informaciones no son demasiado explícitas; sin embargo, de ellas puede deducirse que se piensa en un texto legal dirigido a la Iglesia Universal y, por tanto, común al Derecho Latino y al Oriental. Por otra parte, esta ley tendría carácter fundamental y contendría el "ius constitutum Ecclesiae". Para denominarla se han usado los términos "Codex" y "Lex"; en orden a precisar más su contenido se han utilizado los adjetivos constitutivo, constitucional y fundamental. Las informaciones más recientes —concretamente las relacionadas con el Sínodo de los Obispos y con la última Sesión plenaria de los Cardenales miembros de la Comisión para la reforma del Codex— prefieren la terminología "Ley fundamental".

En un momento como el actual, en el que las actitudes vagamente "antijuridistas" van perdiendo prestigio y se va comprendiendo que el Derecho es absolutamente necesario para asegurar una convivencia eclesial libre y ordenada, que excluya las actitudes paternalistas o demagógicas y tutele a los fieles frente a eventuales abusos de poder en el ejercicio de la "potestas sacra", un proyecto de Ley fundamental de la Iglesia reviste particular importancia⁵. Parece oportuno, por tanto, llevar a cabo un análisis de los problemas que la cuestión plantea, que constituya al menos una primera aproximación al tema⁶.

2. *Noción de ley fundamental.*

Ante todo es necesario que nos preguntemos qué se puede entender por una ley fundamental de la Iglesia. La tradición canónica

del *Codice di Diritto Canonico*, publicada en «L'Osservatore romano» el 29 de mayo de 1968.

5. Me he ocupado de la situación actual del Derecho Canónico en dos artículos recientes: *El Derecho en el actual momento de la vida de la Iglesia*, en «Palabra», n.º 33, mayo 1968, pp. 8-12; *Importancia actual del estudio del Derecho Canónico*, en «Nuestro Tiempo», 29 (1968), pp. 675-689. Vid. también: P. GISMONDI, *I principi conciliari e il diritto canonico*, en «Il diritto ecclesiastico», 78 (1968) I, pp. 3-21; I. MALDONADO, *La significación histórica del Derecho Canónico*, en IVS CANONICVM, 9 (1969), pp. 5-95.

6. Vid. H. HEIMERL, *Esquisse d'un Droit constitutionnel de l'Église*, en «Concilium», n.º 28 (1967), pp. 59-67. Dos breves artículos se ocupan del tema de la ley fundamental en relación con la disciplina denominada «Ius Publicum Ecclesiasticum»: G. FERRANTE, *Diritto Pubblico Ecclesiastico o Diritto Costituzionale Ecclesiastico?*, en «Palestra del Clero», 45 (1968), pp. 848-886; E. FOGLIASSO, *Avremo il Codice del "Ius Constitutum Ecclesiae"? Che ne sarà allora del "Ius Publicum Ecclesiasticum"?*. Ibid. 46 (1967), pp. 48-59; prescindo aquí del aspecto de la cuestión tratado en los citados artículos; mis puntos de vista al respecto han sido expuestos en *Le Droit Public Ecclesiastique selon Vatican II*, en «Apollinaris», 40 (1967), pp. 59-112.

no nos ofrece precedentes útiles; por tanto, sólo es posible proceder, al menos inicialmente, con una referencia al Derecho estatal. Debemos preguntarnos qué se entiende en la ciencia jurídica por ley fundamental, para después —en una segunda fase de nuestra reflexión— analizar los problemas que plantea la aplicación de la noción a las peculiares circunstancias de la Iglesia.

La noción de ley fundamental está íntimamente ligada a la problemática del Derecho Constitucional y participa de la complejidad propia de las cuestiones políticas. No es posible, por tanto, hablar de “ley fundamental” como de una mera categoría técnica, encuadrable sin más en el contexto de la noción de norma, dentro del marco de la Teoría general del Derecho.

La cuestión es mucho más complicada: si entendemos, como es comunmente admitido, que la actividad política “está encaminada a constituir, desenvolver, modificar, defender o destruir un orden en un grupo social”⁷ y que este orden “se expresa en Derecho, en un Derecho *fundamental* que *organiza* una unidad social de vida política y formaliza jurídicamente una organización de poder y un orden social”⁸, es evidente que en la noción que nos ocupa no está en juego solamente el rango, ámbito de aplicación o posible contenido de una determinada ley, sino los fundamentos mismos de un orden jurídico, fijados como consecuencia del ejercicio de un poder constituyente, que a su vez establece el orden dentro del cual deben circunscribirse los poderes con los que se regirá la vida del grupo social *constituido* mediante la ley fundamental.

Este es el núcleo de la cuestión, y es necesario tenerlo en cuenta, para que podamos adoptar un criterio frente a ella con suficientes elementos de juicio. La constitución, ley fundamental (o conjunto de leyes fundamentales) de un pueblo es, pues, una “formalización jurídica que organiza políticamente una estructura social”⁹.

De aquí que el tema de la ley fundamental englobe un cúmulo de cuestiones, cuyo análisis no puede ser llevado a cabo exclusivamen-

7. L. SÁNCHEZ AGESTA, *Principios de teoría política*, 2.^a reimpr. Madrid 1967, p. 259.

8. *Ibid.*

9. *Ibid.*, p. 260.

te con los instrumentos técnicos de la ciencia jurídica, ya que implica una teoría de la sociedad, una concepción del poder, un modo de entender la actividad política, una comprensión del sentido de la historia, una filosofía del Derecho... Demasiadas cuestiones para que tenga sentido intentar siquiera esbozarlas en estas páginas; pero demasiado importantes para que la honestidad intelectual nos permita seguir adelante, sin una toma de conciencia de su complejidad.

Es cierto que la cultura jurídica occidental, dando por supuestas (al menos como planteadas) esas cuestiones fundamentales, maneja la idea de constitución o ley fundamental como un tecnicismo de la Ciencia del Derecho que, pese a las muchas discusiones teóricas, tiene la suficiente concreción para que resulte útil. Obviamente, las posibilidades de utilización pacífica de la noción son fruto de un proceso histórico, verdaderamente laborioso, en el que las ideas de democracia, libertad, Estado de Derecho, limitación del poder y derechos fundamentales de la persona humana se han ido haciendo patrimonio común. Sabemos también que estas ideas han sido alentadas bajo el influjo de ideologías de diverso signo, ante las que el Magisterio de la Iglesia ha adoptado posturas distintas; sin embargo, en la actualidad hay un núcleo de ideas que, desprovistas de tal o cual acento polémico que pudo acompañar a su génesis, han sido sistematizadas, a la luz del mensaje evangélico, en las enseñanzas de los últimos Papas y del Vaticano II, especialmente en la Encíclica "Pacem in terris" de Juan XXIII y en la Constitución conciliar "Gaudium et spes".

En este contexto ideológico y doctrinal se fijan las tres determinaciones del concepto jurídico de ley fundamental, que han sido descritas así:

“1.º Como derecho especial que garantiza originariamente el orden, se asegura su observancia y su constancia, instituyéndola en un documento *escrito*, frecuentemente codificado, cuya promulgación se reviste de especiales solemnidades.

2.º Se entiende que el carácter *fundamental* de la Constitución debe asegurarse instituyéndola como una *superley*, que es definida por un *superlegislador*, distinto y *superior* al legislador ordinario, y que como tal *superley* tiene un *rango superior* a la ley ordinaria, que

debe ser anulada por un órgano *ad hoc*, si contradice la ley constitucional.

3.º Se le asigna, por último, desde el punto de vista de la *organización, un contenido específico* cuya eficacia y permanencia se quiere *garantizar* a través de esos caracteres formales: la organización constitucional debe contener el equilibrio de poderes y una declaración de derechos. Con ese contenido realiza una función: limitar el poder. Como consecuencia de estos caracteres, la Constitución en este sentido formal se define como una *superley* (escrita) de *garantía de una organización determinada* que tiende a *limitar el poder*"¹⁰.

3. *La constitución divina del Pueblo de Dios y la ley fundamental*

No es necesario detenernos más en la compleja temática de la noción de ley fundamental¹¹ para atender al objeto de estas páginas. Las afirmaciones que hemos recogido son lo bastante generales para situar el tema fuera de cuestiones polémicas y posiciones de escuela y lo suficientemente concretas para afrontar lo que aquí nos interesa: las posibilidades de aplicación del concepto a las peculiares circunstancias de la Iglesia.

Para ello es necesario recordar dos experiencias, muchas veces comprobadas, relativas a la aplicación al Derecho de la Iglesia de nociones construídas en el campo del Derecho estatal. La primera es el peligro de oscurecer las nociones teológicas imprescindibles para la comprensión de la Iglesia, mediante la utilización de nociones extrañas; desde este punto de vista nunca se afirmará con suficiente vigor que la Iglesia no es un Estado. Por otra, el precipitarse a señalar

10. *Ibid.*, p. 261. Evidentemente, el pasaje citado se refiere a la constitución o ley fundamental en sentido formal, no en sentido material; por ello, entre otras cosas, habla de un documento escrito, promulgado con especiales solemnidades. No es necesario detenernos aquí sobre la conocida distinción entre constitución en sentido material y en sentido formal, puesto que el proyecto de *Lex fundamentalis* para la Iglesia, tal como ha sido descrito en las informaciones de que disponemos sería un texto legal escrito, formal. Existen además otras razones eclesiológicas, de las que nos ocuparemos más adelante, que excluyen la aplicación a nuestro tema de la noción de constitución en sentido material.

11. Para exposición rigurosa del problema vid. J ZAFRA VALVERDE, *Teoría fundamental del Estado* (Pamplona 1967), pp. 263-290 y 408-439; P. BISCARETTI DI RUFFIA y S. ROZMARNY, *La Constitution comme loi fondamentale dans les Etats de l'Europe occidentale et dans les Etats socialistes*, (Torino-París 1960).

que cualquier progreso técnico conseguido por la ciencia del Derecho, en orden a la institucionalización del ejercicio del poder o a la tutela de los derechos de la persona, debe descalificarse a priori, alegándose para ello las peculiares características de la Iglesia. Ambos riesgos deben tenerse en cuenta en las circunstancias actuales. El primero, porque en un momento (descrito por Pablo VI en la *Ecclesiam suam*) en el que la Iglesia reflexiona sobre sí misma, cualquier abuso en la utilización de nociones ajenas nos puede llevar a detenernos en lo accidental y a perder de vista las raíces mistericas de la constitución divina de la Iglesia. El segundo, porque la insistencia excesiva en lo peculiar de la Iglesia, con la consiguiente resistencia a aceptar para su orden jurídico cualquier progreso en lo relativo a la ordenación de los fenómenos de convivencia humana, puede originar —y no hablo de una mera hipótesis— una curiosa falta de sintonía entre lo que el Magisterio eclesiástico exige en este campo a los Estados y las efectivas realizaciones de la Iglesia en su propio Derecho¹².

Hechas estas aclaraciones es necesario, ante todo, afirmar que la Iglesia *no puede constituirse* mediante una ley fundamental, por la sencilla razón de que ya está constituida. Fue constituida por el mismo Cristo fundador. La constitución de la Iglesia es, pues, una constitución divina, mediante la cual, según la expresión petrina¹³ recogida en la Constitución *Lumen gentium*¹⁴, lo que no era ni siquiera un pueblo, ahora es el pueblo de Dios. En este sentido, la constitución de la Iglesia no ha sido promulgada, sino revelada; sus fuentes de conocimiento son, en definitiva, las fuentes de la revelación. Por otra parte, el Magisterio de la Iglesia, al ir explicitando el sentido del depósito revelado, nos está exponiendo los principios básicos de la constitución de la Iglesia, venciendo con la asistencia del Espíritu Santo ingentes dificultades¹⁵. Desde este punto de vista tenía toda

12. Cfr. los artículos cit. en la nota 5; vid. también: A. PRIETO, *Los derechos subjetivos públicos en la Iglesia*, en «Iglesia y Derecho» (Salamanca 1965), pp. 325-361. En relación con el problema apuntado en el texto, me considero deudor de las investigaciones que está llevando a cabo P. J. VILADRICH sobre los derechos fundamentales en el ordenamiento canónico.

13. 1 Pt. 2, 10.

14. N. 9.

15. Pablo VI decía el 21 de noviembre de 1964, dirigiéndose a los Padres Conciliares con ocasión de la clausura de la tercera sesión del Vaticano II, estas significativas palabras: «Longum est disserere de opere patrato: de studio pio et acri, eo pertinente ut illud cum veritate, quae in Sacris Bibliis continetur, et cum germana traditione Eccle-

la razón un ilustre colega que, comentando el texto de Pablo VI en el que se aludía a la codificación del *ius constitutum Ecclesiae*¹⁶, me decía que no hacía falta una ley fundamental, puesto que esta función ya la cumple la Const. *Lumen gentium*.

He aquí una consideración fundamental, sobre la que es necesario reflexionar. Desde el punto de vista de su constitución divina la Iglesia está definitivamente constituída, puesto que la revelación de Cristo quedó definitivamente cerrada. Por otra parte, la función magisterial de declarar el depósito de la revelación no puede ser objeto de una definitiva codificación, puesto que la Iglesia, en su continuo dinamismo, no puede renunciar a ulteriores progresos. He aquí una constitución en sentido material —empleo en sentido analógico, pero conscientemente, el tecnicismo de los estudiosos del Derecho Constitucional— ya establecida y, al mismo tiempo, necesariamente abierta, puesto que Cristo, poder constituyente en el más genuino y radical sentido, al mismo tiempo que ejerció su función con efectos definitivos e irreformables, pidió al Padre que enviara a un Consolador, el Espíritu de Verdad, bajo cuya asistencia la Iglesia continuamente se enriquece en la penetración de las virtualidades de la acción fundacional.

Dadas estas premisas, ¿tiene sentido hablar en la Iglesia de una ley fundamental en sentido formal? No vacilaría en dar a esta pregunta una respuesta afirmativa, pero es preciso mostrar con claridad la función que puede desempeñar. En este sentido es necesario destacar las siguientes consideraciones:

1.º La ley fundamental debe ser entendida como una explicitación y concreción de los principios más importantes de la constitución de la Iglesia; por ello, sus fuentes básicas deben ser: a) los textos del Magisterio eclesiástico que exponen el estado actual de la comprensión, por parte de la Iglesia, de su propio misterio, en aquello que afecta

siae plane congrueret; de labore ideo suscepto, ut intima vis et primaria veritas iuris constitutivi Ecclesiae ipsius invenierentur, ut discerneretur inter id quod est immobile et certum, et id quod e principiis naturali et legitima progressionem deducitur; de studio denique quaquaversus in sua luce ponendi Ecclesiae mysterium, ita ut congrua ratione illustretur vita Corporis Christi mystici, quoad omnes suas partes, quoad omnia sua munera, quoad omnes fines ipsi assequendos». Cfr. A. A. S., 56 (1964), p. 1.009.

16. Cit. en la nota 1.

al ordenamiento jurídico; b) aquellas enseñanzas del Magisterio sobre la dignidad de la persona humana y la organización de los fenómenos de convivencia que por tener un alcance general son aplicables a la Iglesia, en cuanto que es una comunidad jurídicamente organizada.

Sin embargo, no tendría ningún sentido reducir el proyecto de ley fundamental a una especie de elenco de principios, recogidos de los documentos conciliares y del magisterio de los últimos pontífices romanos, puesto que un texto de este género nada nuevo añadiría a lo ya dicho en las fuentes que le sirvan de base; en todo caso, podría tener un valor didáctico, pero no es ésta la finalidad de una ley fundamental. Además, tal proyecto tendría muchos inconvenientes: reproducir en su génesis las tensiones que tuvieron lugar durante el Concilio; provocar una duplicidad de formulaciones de los principios (las de los documentos magisteriales y las del texto de la ley, que así concebida no sería otra cosa que un nuevo acto de magisterio), con el consiguiente riesgo de dudas de interpretación; “codificar” excesivamente las enseñanzas magisteriales, presentando estáticamente algo que por su naturaleza es dinámico y en continuo progreso.

La ley fundamental, para poder ser calificada con esa denominación y resultar verdaderamente útil, habría de ser una concreción técnico-jurídica de los principios de Derecho divino positivo y natural, adaptada a las actuales exigencias de la Iglesia. La constitución divina de la Iglesia es inmutable; en cambio, la ley fundamental, entendida de manera análoga a una constitución en sentido formal, habría de ser una *opción histórica* de la Iglesia en orden al cumplimiento de la exigencia de *organizarse* de acuerdo con su constitución divina, en atención a unas concretas circunstancias del estadio de su peregrinación *in hoc saeculo* por el que atravesamos.

Para desarrollar esta idea es necesario considerar el tema del Derecho Canónico en relación con la presencia de la Iglesia en la historia: “Debiéndose extender a toda la tierra —dice la Constitución *Lumen gentium* refiriéndose al Pueblo de Dios—, entra en la historia de los hombres, pero al mismo tiempo trasciende los tiempos y los confines de los pueblos. Entre las tentaciones y las tribulaciones del camino la Iglesia es sostenida por la fuerza y la gracia de Dios, prometida por el Señor, a fin de que por la debilidad humana no

decaiga la fidelidad perfecta, sino que permanezca como digna esposa de su Señor, y no cese, con la ayuda del Espíritu Santo, de renovarse a sí misma, a fin de que a través de la Cruz llegue a la luz que no conoce ocaso”¹⁷.

Este esfuerzo de la Iglesia por renovarse continuamente a sí misma, como exigencia de su fidelidad de Esposa del Señor, tiene que manifestarse también —y en los momentos actuales con una especial urgencia— en la evolución del Derecho Canónico, que ha de utilizar unos instrumentos técnicos nuevos en orden a instaurar un orden apto para que los principios fundamentales de su constitución divina, tal como nos los muestra el magisterio del Vaticano II, encuentren una aplicación adecuada a los signos de nuestro tiempo. Recientemente decía Pablo VI que la “legislación canónica no es algo estático o inmóvil; sino que, sin cambiar su función esencial, de cuando en cuando, en determinados momentos de maduración histórica renueva sus articulaciones y formulaciones técnicas”¹⁸. De este modo, el conjunto de textos que reflejan la evolución del Derecho Canónico “representa y testimonia únicamente el esfuerzo constante de la Iglesia para adaptar su legislación a los diversos momentos y contextos históricos, siempre al servicio del desarrollo progresivo de la Iglesia de Dios”¹⁹.

Desde esta perspectiva hay que plantearse el problema que nos ocupa. Dado el grado de penetración en el conocimiento de la constitución divina de la Iglesia que reflejan los textos del Vaticano II, ¿la promulgación de una ley fundamental constituye una solución técnica adecuada a las exigencias actuales de la vida de la Iglesia?

2.º Para resolver adecuadamente la cuestión que acabamos de plantear es necesario considerar al Derecho Canónico en relación con las circunstancias actuales de la vida eclesial. De este tema, sin embargo, me he ocupado ya en otros escritos²⁰; por ello, aquí no es preciso detenernos en la cuestión. Baste recordar que los grandes riesgos —las dos grandes tentaciones del camino, en el sentido del

17. N. 9.

18. Discurso a los participantes en el «Conventus Internationalis Canonistarum», 25 de mayo de 1968; Cfr. «L'Osservatore romano» de 26 de mayo de 1968.

19. Ibid.

20. Vid. los artículos cit. en las notas 5 y 6.

texto de la *Lumen gentium* que acabamos de citar ²¹— que hoy amenazan al orden de la convivencia eclesial, son la arbitrariedad y la anarquía. Sin adoptar soluciones frente a ambos riesgos, es inútil hablar de un planteamiento del Derecho Canónico inspirado en el respeto a la dignidad de la persona humana ²², ni tiene sentido insistir sobre la responsabilidad de todos los fieles en la consecución del fin de la Iglesia.

La cuestión tiene especial gravedad, porque el Pueblo de Dios “prefigura y promueve la paz” de toda la humanidad ²³. Es éste un aspecto importante de la Iglesia, como “sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano” ²⁴. La Iglesia ha de ser germen de unidad y de justicia en el mundo, como signo, como testimonio: ha de ser ella misma institucionalmente ordenada, pacífica, justa... Lo que la Iglesia pide a las comunidades humanas ha de encarnarlo en su propia vida comunitaria. Cuando afirma que “la dignidad de la persona humana se hace cada vez más clara en la conciencia de los hombres de nuestro tiempo” y considera justos los anhelos de los que reclaman “la delimitación del poder público, a fin de que no se restrinjan demasiado los confines de la justa libertad, tanto de la persona como de las asociaciones” ²⁵; o cuando recuerda que para “lograr resultados felices en el curso diario de la vida pública es necesario un orden jurídico positivo que establezca una adecuada división de las funciones institucionales de la autoridad política, así como también una protección eficaz e independiente de los derechos” ²⁶; en una palabra, cuando la Iglesia pide a los hombres que las organizaciones de la convivencia temporal estén dotadas de un orden jurídico, ella misma está asumiendo el compromiso de arbitrar unas soluciones para su propia vida comunitaria que, siendo coherentes con su peculiar natu-

21. N. 9.

22. En el cit. discurso a los participantes en el «Conventus Internationalis Canonistarum», Pablo VI insistió en la tradicional doctrina pontificia sobre la significación que ha de tener la dignidad de la persona humana en todo ordenamiento jurídico, aplicándola con claridad al ordenamiento canónico.

23. Const. *Lumen gentium*, n. 13.

24. *Ibid.*, n. 1.

25. Decl. *Dignitatis humanae*, n. 1.

26. Const. *Gaudium et spes*, n. 75.

raleza, contribuyan eficazmente a implantar una convivencia eclesial que verdaderamente refrende con el testimonio estas enseñanzas.

Pablo VI, clausurando el segundo periodo conciliar, afirmaba explícitamente que la dignidad de la persona y la potestad son las dos grandes cuestiones para el desarrollo del Derecho Canónico²⁷. Es lógico, por tanto, que, como base de la revisión de la legislación canónica, se utilice el instrumento técnico que la ciencia jurídica considera como el más idóneo para regular el ejercicio del poder en función de la tutela de los derechos fundamentales: una ley fundamental.

3.º Es necesario subrayar que una ley es calificada de fundamental, no sólo por la importancia de las materias que regula, sino especialmente por la función que cumple en el conjunto de un sistema normativo. De aquí la importancia de las notas que la distinguen de las leyes ordinarias. Aun cuando las leyes constitucionales de los de los distintos países presentan notas peculiares debidas a las características de cada sistema y a las variadas tradiciones de los pueblos, para que pueda calificarse a una ley de fundamental o constitucional parece necesario que reúna las siguientes características:

a) Tener el máximo rango en la jerarquía de las leyes de un determinado ordenamiento jurídico, de tal suerte que cualquier ley inferior que la contradiga deba ser anulada por los tribunales o por un órgano específicamente constituido para declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

b) Proceder de un legislador superior al competente para dictar leyes ordinarias.

c) Ser promulgada con especiales solemnidades.

27. «Nonne futurum legum canonicarum progressum, quibus Ecclesia regitur, iam nunc licet prospicere? Quem quidem progressum non alio spectare posse putamus, quam ut potissimum singulis Ecclesiae membris singulisque officiis auctior dignitas agnoscat et amplior tribuatur operandi facultas; deinde ut sacra potestas, ex qua universa catholicae societatis compago per varios hierarchiae gradus firma constat, magis magisque roboretur, et quidem quasi ex virtute intus suscepta: hoc est ex amoris, concordiae mutuaeque observantiae incremento. Quare hoc Concilium grande sane eventum censendum est. ac praestantissimum donum a Deo Ecclesiae suae collatum, quandoquidem animi nostri ad haec cogitata, ad haec proposita tam vehementer inardescunt». (Discurso pronunciado cerrando la segunda sesión del Concilio Vaticano II el 4 de diciembre de 1963; A. A. S., 56, 1964, p. 33).

¿Son coherentes estas notas con las peculiares características del ordenamiento de la Iglesia?

La mayor dificultad estriba en la nota señalada en el apartado b), pues resulta difícil distinguir en el ordenamiento canónico unos órganos legislativos constitucionales distintos de los competentes para dictar las leyes ordinarias.

En primer lugar nunca será posible en la Iglesia atribuir a un órgano la función de fijar los criterios básicos del orden jurídico, de una manera análoga a como puede hacerlo una asamblea constituyente, puesto que la constitución divina ha sido establecida por Cristo y la Iglesia progresa en la penetración de sus exigencias, mediante la interpretación magisterial de las fuentes de la revelación.

En cuanto a la ley fundamental (entendida como opción técnica para concretar las soluciones fundamentales de Derecho humano en orden a la aplicación de los principios de la constitución divina en el actual momento histórico de la vida de la Iglesia, especialmente en lo que se refiere a la proclamación de los derechos fundamentales de los fieles y la fijación de criterios para el ejercicio de la “sacra potestas”), sólo es posible que sea promulgada por un Concilio Ecuménico o por el Romano Pontífice. Creo, sin embargo, que debe descartarse la primera posibilidad. El Concilio Vaticano II ya ha fijado los criterios fundamentales de carácter doctrinal necesarios para pasar a la fase de concreción técnico-jurídica; por tanto, no parece que tenga sentido convocar un nuevo Concilio para la elaboración y promulgación de la ley fundamental. La ley fundamental necesariamente habría de ser un acto del Romano Pontífice, al cual correspondería también —sean cuales fueran las soluciones que se adopten en la futura legislación canónica acerca de los requisitos formales para la vigencia de las leyes— la sanción de las leyes ordinarias canónicas, al menos las de ámbito universal.

Pese a esta necesaria coincidencia de legislador entre la ley fundamental y determinadas leyes ordinarias, me parece que es posible que existan en la Iglesia unas normas de verdadero rango constitucional; para ello sería suficiente que el acto de promulgación de la ley fundamental revistiera especiales solemnidades y que se fijen con claridad en ella los criterios que establezcan la jerarquía de normas

en el ordenamiento canónico. Examinemos ambos aspectos de la cuestión:

a) Ponía de relieve en las páginas anteriores que la constitución divina de la Iglesia no está promulgada, sino revelada. No se me ocultaba entonces que, en ocasiones, los teólogos utilizan la palabra “promulgación” para referirse a la revelación hecha por Cristo; es necesario, sin embargo, tener en cuenta que en ese caso el término “promulgación” se utiliza en un sentido analógico, pero esta palabra tiene en la técnica jurídica un sentido muy preciso, en manera alguna trasladable a la revelación divina. Si entendemos por promulgación de una ley dar a conocer su contenido, es legítima la analogía con la revelación; pero me parece que lo fundamental en la promulgación de las leyes no es una función divulgadora, sino de certeza y seguridad jurídica que tiene unos perfiles técnicos en los que no puede comprimirse toda la riqueza teológica de la revelación divina. Promulgar una ley significa fundamentalmente, a mi juicio, fijar auténticamente —mediante una intimación vinculante— el conjunto de palabras en las que la norma legal se manifiesta, de tal suerte que conste de su preciso contenido cuando su aplicabilidad a unos supuestos concretos se haga litigiosa y tengan que pronunciarse sobre ello los jueces. El viejo aforismo que se pone tradicionalmente en boca del juez —“da mihi factum, dabo tibi ius”— que implica la consecuencia de que no es necesario alegar ante los tribunales la existencia de las leyes, porque “iura novit curia” (porque los tribunales ya conocen la existencia y contenido de las leyes), tiene una estrecha relación con la teoría de la promulgación. Las leyes no tienen que ser alegadas y probadas ante los tribunales, *porque han sido promulgadas*; en este sentido creo que puede afirmarse que la promulgación —por ser un instrumento de certeza y seguridad jurídica acerca del contenido de las leyes— preconstituye la prueba del dato normativo, lo cual es, junto al enjuiciamiento de los hechos, un elemento decisivo para la aplicación del Derecho a los casos concretos. En cambio, aquellas normas que no se promulgan —por ejemplo las costumbres— deben ser alegadas y probadas ante los tribunales por aquel que desea que sean tenidas en cuenta para la declaración de sus derechos.

Así las cosas, el “modus promulgandi” tiene un efecto decisivo

en la eficacia de las normas, puesto que tiene que ser expresivo, no sólo de su contenido, sino también de su rango en el conjunto del sistema normativo.

De acuerdo con estos criterios, entendiendo que la promulgación de la ley fundamental debe ser un acto del Romano Pontífice de especial solemnidad, puesto que no se trata sólo de la promulgación de una ley más —particularmente importante *ratione materiae*— sino también de la instauración de los criterios a los que deben someterse los ulteriores actos legislativos de la Iglesia, incluso los refrendados por la autoridad del Romano Pontífice, hasta que se proceda —con idénticas solemnidades— a una explícita modificación de las normas de rango fundamental.

Evidentemente, un acto legislativo de tal solemnidad debe ser precedido de un serio estudio. Para ello parece imprescindible el trabajo previo de una comisión de destacados teólogos y canonistas, que culmine en la redacción de un proyecto, el cual podría ser sometido ulteriormente a un órgano consultivo que represente al episcopado universal. En el actual estadio de la organización eclesial, entiendo que el órgano más adecuado para cumplir esta función es el Sínodo de los Obispos.

Tras estas fases de estudio ponderado, cuya seriedad no tiene por qué ir en detrimento de la celeridad, podría procederse a la solemne promulgación de la ley por parte del Romano Pontífice, bajo cuya alta y efectiva dirección se habrían desarrollado los trabajos de elaboración del texto.

b) Sin embargo, el rango de norma fundamental no se lo daría a la ley exclusivamente la solemnidad de la promulgación. Es necesario además que en ella se establezcan con claridad unos criterios acerca de la jerarquía de las fuentes en el ordenamiento de la Iglesia, de cuyo sistema sería la propia ley fundamental la pieza principal.

Uno de los problemas más serios que tiene planteados el sistema canónico vigente es la falta de criterios claros en lo que atañe a la jerarquía en el rango de las normas. Estamos habituados a valorar las leyes de la Iglesia exclusivamente en función del grado jerárquico de su autor; en cambio, no se atribuye importancia, desde este punto de

vista, a la naturaleza de los actos normativos. Actualmente es posible proceder a la modificación de textos del Codex o de normas legales propiamente dichas —por ejemplo, dictadas en forma de Constitución apostólica o dadas *motu proprio*— mediante decretos e instrucciones de dicasterios de la Curia Romana, con tal de que estos actos hayan sido aprobados por el Papa. Este modo de proceder provoca una notable confusión en el sistema normativo, no sólo por la imprecisión de la doctrina jurídica sobre los diversos tipos de aprobación pontificia —en forma específica, común, etc.—, sino también por la coincidencia práctica de los organismos técnicos que elaboran o modifican las leyes con los que realizan la actividad administrativa que debe estar sometida a la ley.

Esta imprecisión en el sistema normativo provoca una situación de inseguridad en la tutela de los derechos de los fieles. Quizás este hecho pueda explicarse porque el sistema jurídico que consagró el Código de 1917 estaba inspirado en una Eclesiología de matiz preferentemente hierarcológico, en la cual se tenía una visión excesivamente pasiva de la función eclesial de los fieles y en la que aún no se había tomado conciencia de la importancia que, en base a la constitución divina de la Iglesia, tiene la igualdad derivada de la común condición de fiel (previa a la desigualdad funcional) y de la responsabilidad que compete a todos cuantos peregrinan en el Pueblo de Dios, en orden a la consecución de los fines de la Iglesia²⁸. La visión de la Iglesia que reflejaba la Eclesiología que está en la base del Código de 1917 explica que lo que más preocupó a los redactores del cuerpo legal vigente fue dar unas normas de actuación de la jerarquía, más que un orden jurídico en el que, junto a la actividad jerárquica, todos los fieles encontraran cauces de actuación responsable.

No es necesario insistir aquí sobre el enriquecimiento que, desde este punto de vista, significa la doctrina del Vaticano II. Este enri-

28. Me he ocupado de esta cuestión en el estudio citado en la nota 6. La relación de estos problemas con la distinción entre Derecho público y Derecho privado he intentado señalarla en *El estatuto jurídico del catecúmeno según los textos del Concilio Vaticano II*, en *IVS CANONICVM* 6 (1966), pp. 529-534. Del problema del laicado, en relación con la temática apuntada en el texto, he tratado en *Los laicos en el Derecho de la Iglesia*, *ibid.*, pp. 339-374. En estos trabajos pueden encontrarse referencias a textos conciliares e indicaciones bibliográficas, que no es posible hacer aquí, por no permitirlo los naturales límites del presente escrito.

quecimiento debe llevar a una nueva concepción del Derecho Canónico, que no sea sólo una regulación de la actividad de la jerarquía, sino verdaderamente el Derecho del Pueblo de Dios. El espíritu de este nuevo Derecho Canónico ha sido anunciado claramente por Pablo VI en diversas ocasiones; baste ahora recordar unas significativas palabras, pronunciadas por el Papa en la solemne conmemoración del Cincuentenario del Código de Derecho Canónico que tuvo lugar el 27 de mayo de 1967: "La Iglesia, que por ser una comunidad no sólo espiritual, sino también visible, orgánica, social y ordenada, tiene necesidad de una ley escrita y de órganos que la promulguen y la apliquen, no solamente por mero ejercicio de autoridad, sino precisamente para la tutela de la esencia y de la libertad, tanto de los entes morales como de las personas físicas que componen la Iglesia misma" ²⁹.

Para lograr la vigencia de este espíritu en la concepción de las soluciones técnicas del Derecho Canónico, es necesario que existan unas garantías jurídicas de los derechos de los fieles, comenzando por proporcionar mayor seguridad y certeza al mismo sistema normativo. Para lograr este fin me parece imprescindible distinguir claramente tres planos en las normas legales canónicas:

a') Las normas fundamentales, promulgadas con las solemnidades antes propuestas, que sólo podrían ser modificadas por normas de rango constitucional; es decir, por actos del Romano Pontífice en los que constara explícitamente la voluntad de modificar la legislación de la Iglesia a nivel fundamental. En la ley fundamental deberían regularse expresamente los requisitos formales a los que quedara condicionada la vigencia de las leyes de rango inferior y los criterios en que habría de basarse la eficacia normativa de la costumbre canónica ³⁰.

b') Las leyes ordinarias, dictadas por las autoridades eclesiásticas competentes según su ámbito de aplicación, que habrían de

29. Cfr. «L'Osservatore romano», 29-30 de mayo de 1967.

30. No es posible detenernos aquí sobre las posibilidades de una reelaboración de la clásica doctrina canónica sobre la costumbre, a la luz de las enseñanzas sobre el Pueblo de Dios de la Const. *Lumen Gentium*. Para un sugestivo enfoque del tema vid.: I. ARIAS. *El "consensus communitatis" en la eficacia normativa de la costumbre* (Pamplona 1966).

contar con el asesoramiento de adecuados órganos consultivos, siempre distintos de los encargados de la actividad administrativa. Las leyes ordinarias —sin perjuicio de los problemas de jerarquía entre disposiciones a diversos niveles; por ejemplo, sometimiento de la actividad legislativa diocesana a las leyes ordinarias de rango superior— dictadas a cualquier nivel, podrían ser anuladas por un órgano independiente, a quien se confiara esta específica competencia, en caso de infracción de la ley fundamental.

c') Las disposiciones administrativas, es decir, las instrucciones, decretos generales, etc. dictados por los órganos administrativos en el ámbito de su competencia, para desarrollar las normas legales (actividad reglamentaria). Estas normas deberían ser dictadas por los órganos administrativos bajo su exclusiva responsabilidad, es decir, sin que fuese posible un refrendo o aprobación por parte de autoridades superiores. Estas disposiciones podrían ser impugnadas, en caso de infracción de ley, mediante el sistema de recursos que se establezca para solicitar la revisión de los actos administrativos.

4.º Los criterios técnicos que acabamos de exponer necesitan una mayor concreción, que no es posible llevar a cabo aquí, dados los estrechos límites de este trabajo. Es evidente que estos puntos de vista pueden —y quizás deban— ser objeto de matizaciones; sin embargo, estoy persuadido de que muestran con suficiente claridad un planteamiento que considero imprescindible para que pueda hablarse con autenticidad de una ley fundamental de la Iglesia.

Podría objetarse que estos puntos de vista implican un sometimiento excesivo a requisitos formales del ejercicio del poder pastoral, que quizás a algunos pudiera parecer incorrecto desde el punto de vista teológico. A propósito de esta posible objeción quiero anticipar una conclusión provisional: si no fuera posible, por razones de orden eclesiológico, el establecimiento de unos criterios en la jerarquía de las normas legales canónicas, lo aconsejable sería renunciar al proyecto de la ley fundamental; en efecto, no me parece que tenga sentido dar esta denominación a un texto que jurídicamente no pueda ser calificado de ley de rango constitucional. Esta conclusión —provisional y meramente hipotética— me parece una exigencia de autenticidad.

No creo, sin embargo, que sea necesario llegar a esta conclusión, porque no me parece que existan dificultades de orden doctrinal que impidan dar a la Iglesia una auténtica ley fundamental; por el contrario, me parece que una ley de este tipo puede ser una óptima solución técnico-jurídica para llevar a la práctica las exigencias de la doctrina sobre la Iglesia del Vaticano II.

Ante todo hay que subrayar que la Constitución *Lumen gentium* y las enseñanzas de Pablo VI nos ponen claramente de relieve dos principios, derivados de la constitución divina de la Iglesia, que han de estar en la base del ordenamiento jurídico canónico:

a) El poder canónico reside en la jerarquía y radica en la participación *ministerial* en el sacerdocio de Cristo.

b) El poder canónico ha de ser ejercido de tal suerte que asegure cauces de acción responsable a todos los miembros del Pueblo de Dios en orden a la consecución del fin de la Iglesia y garantice la libertad y dignidad de todos los fieles, mediante una vigorosa tutela de los derechos fundamentales del cristiano.

Así las cosas, me parece que es necesario descartar cualquier concepción de constitucionalismo eclesiástico, que implicara la idea de que la jerarquía recibe sus poderes de la comunidad. Ello iría contra la doctrina conciliar que explica que la Iglesia se estructura orgánicamente por medio de los sacramentos³¹ y, en concreto, sobre la función del sacramento del orden en relación con la constitución jurídica de la Iglesia³².

En cambio, firme el principio de que el poder pastoral radica en la jerarquía, hay que recordar la exigencia de la constitución divina de la Iglesia, subrayada también por el Concilio, de que la potestad sea ejercida de tal suerte que garantice la libertad y dignidad de los fieles. Precisamente la promoción de esta libertad y dignidad constituye una de las manifestaciones más genuinas del carácter ministerial —diaconía de servicio— de la función jerárquica.

De aquí que la jerarquía, al sentar las bases —mediante una

31. Const. *Lumen gentium*, n. 11.

32. *Ibid.* y cap. III.

opción histórica— de un orden jurídico eclesial, coherente con la constitución divina de la Iglesia y que dé respuesta a los signos de nuestro tiempo, deba arbitrar fórmulas técnicas que aseguren la dignidad y libertad de los fieles mediante “un orden jurídico positivo que establezca una adecuada división de las funciones institucionales de la autoridad pública, así como también una protección eficaz e independiente de los derechos”³³.

Evidentemente este orden jurídico no puede ser *impuesto* a la jerarquía, puesto que debe surgir como fruto del ejercicio de los poderes que a ella competen; pero no parece posible una tutela de los derechos verdaderamente eficaz si la jerarquía no se autolimita a ejercer el poder pastoral de acuerdo con unas normas fundamentales, que pueden ser modificadas por el Romano Pontífice, pero que subordinen a su imperio a todas las leyes ordinarias dictadas a cualquier nivel, mientras no sean expresamente derogadas mediante un acto legislativo, también de rango fundamental.

4. *Contenido de la ley fundamental*

No es posible intentar en estas líneas una exposición detallada de las distintas cuestiones que habrían de ser reguladas en la ley fundamental, porque ello significaría diseñar un proyecto de texto, lo cual rebasa con mucho las posibilidades de este artículo. Basten unas brevísimas indicaciones que reflejen someramente mis puntos de vista al respecto.

Ante todo, considero que la ley fundamental debe ser un texto breve que evite sus dos fundamentales riesgos: a) descender innecesariamente a detalles propios de las leyes ordinarias; b) mantenerse en un tono expositivo, sin concretar de manera efectivamente vinculante los principios fundamentales sobre los que ha de apoyarse todo el orden jurídico de la Iglesia. En concreto, entiendo que la ley fundamental debe regular las siguientes materias:

a) Mediante unas formulaciones breves, recogidas casi literalmente de los documentos del Concilio, debe indicarse la conexión entre el elemento místico de la Iglesia y el ordenamiento jurídico ca-

33. Const. *Gaudium et spes*, n. 75.

nónico, de tal suerte que se muestren claramente las raíces sacramentales del Derecho Canónico, el carácter eminentemente dinámico de la comunidad eclesial (con el cual han de ser coherentes sus estructuras jurídicas), la unidad de la Iglesia concebida como "Corpus Ecclesiarum" y el sentido de la norma en la Iglesia.

b) Una ley constitucional exige por su propia naturaleza la proclamación de los derechos fundamentales de la persona humana. Obviamente, esta proclamación no debe ser un elenco de los derechos que, según el Magisterio de la Iglesia, deben ser reconocidos en los ordenamientos jurídicos estatales, sino la enumeración de los que la Iglesia efectivamente reconoce y tutela en su propio ordenamiento, derivados de la dignidad de la persona humana y de su vocación sobrenatural. Por ello parece imprescindible, ante todo, reconocer explícitamente las consecuencias jurídicas de la vocación de todo hombre a la Iglesia, el estatuto jurídico del catecúmeno a nivel fundamental³⁴, el estatuto jurídico fundamental común a todos los fieles³⁵ y el de los hermanos separados. A continuación deben enumerarse los derechos derivados de las específicas misiones eclesiales; es decir, de los ministros sagrados, de los religiosos y de los laicos³⁶. Obviamente, lo que se dice de los derechos es aplicable también a aquellos deberes susceptibles de una enumeración a nivel de ley fundamental.

c) Partiendo de la consideración eclesiológica de la jerarquía de la Iglesia y del sentido de servicio con que deben ser ejercidas las funciones de gobierno en la comunidad eclesial, la ley debe recoger los principios de Derecho divino y de venerable Derecho eclesiástico en los que se basa la organización oficial de la Iglesia. Es imprescindible que se fijen también los principios básicos de la distinción de funciones. Evidentemente, la ley fundamental no debe describir toda

34. Cfr. Const. *Lumen gentium*, n. 14; Decret. *Ad gentes*, n. 14.

35. Cfr. P. FELICI, *El Concilio Vaticano II y la nueva codificación canónica*, en «*Ius Canonicum*», 7 (1967), p. 314.

36. Me refiero a los derechos que afectan al estatuto jurídico personal, no los que pueden adquirirse «*ratione muneris*». Vid. sobre esta cuestión: P. LOMBARDIA, *La sistemática del Codex y su posible adaptación*, en «*Teoría general de la adaptación del Código de Derecho Canónico*» (Bilbao 1961), pp. 218-229; *El estatuto personal en el ordenamiento canónico*, en «*Aspectos del Derecho Administrativo Canónico*» (Salamanca 1964), pp. 51-66.

la organización de la jerarquía de la Iglesia, pero sí debe fijar las bases a que hayan de atenerse en esta materia las leyes de rango inferior.

d) El fin más importante que ha de cumplir la ley fundamental es instaurar las bases de un orden jurídico eclesial, según el espíritu del Concilio. Este aspecto tiene particular importancia porque es aquel en el que las normas fundamentales tendrán un carácter más marcadamente innovador. Téngase en cuenta que aquellos aspectos de la ley a que nos hemos referido en los apartados a), b) y c), aún cuando requieran una concreción a nivel legislativo, están suficientemente explicitados en los documentos conciliares; en cambio, las cuestiones a que apuntamos aquí constituyen precisamente las soluciones jurídicas concretas cuya implantación compete a la ley fundamental, a saber: jerarquía de normas, requisitos formales de la actividad legislativa, determinación de la actividad judicial y procedimiento y forma de la actividad administrativa, garantías fundamentales en la tutela de los derechos, garantías penales, etc. Las formulaciones deben ser muy breves, pero lo suficientemente explícitas para que sea posible invocarlas eficazmente en orden a eventuales declaraciones de inconstitucionalidad de leyes ordinarias.

e) Finalmente, la ley debe recoger una sobria exposición de los principios en que se basan las relaciones de la Iglesia con las organizaciones jurídicas temporales (Estados, organismos internacionales, etc.).

5. *La ley fundamental en el sistema normativo de la Iglesia.*

En la referencia de la conferencia de prensa del Card. Urbani, con ocasión del Sínodo de los Obispos, que publicó "L'Osservatore romano"³⁷, se alude al estudio por parte de los padres de la oportunidad de elaborar una ley fundamental "preámbulo del Código".

Si al hablarse de la ley fundamental como preámbulo del Código quiere decirse que aquélla debe ser promulgada antes que éste, la medida debe considerarse acertadísima; es más, imprescindible. Un sistema normativo centrado en una ley fundamental, exige —como ya

37. Cfr. supra, nota 3.

hemos indicado— una subordinación de todas las leyes ordinarias a las normas constitucionales establecidas en ella. En este sentido, el Código o los Códigos de Derecho Canónico que hubieran de promulgarse habrían de considerarse como leyes ordinarias aunque de gran importancia; por tanto, habrían de someterse a la exigencia de no conculcar las normas constitucionales, para no incurrir en el vicio de inconstitucionalidad. En una circunstancia como la actual en la que se pretende revisar la totalidad de la legislación canónica, incluyendo en el proyecto de reforma la redacción de una ley fundamental, parece lógico que esta ley sea promulgada en primer lugar y que las restantes leyes, de diverso rango, se ajusten a los requisitos formales y sustanciales establecidos en las normas constitucionales.

Por ello, considero que la ley fundamental no puede considerarse parte integrante de *un código*, que necesariamente tendría un rango inferior a la ley fundamental y probablemente diverso ámbito de aplicación, ya que la ley fundamental necesariamente tendría aplicación universal, mientras que el Código en cuya redacción se trabaja en la actualidad, estaría reservado a la Iglesia latina, sin perjuicio de que en otro u otros Códigos distintos pudiese recogerse la legislación para la Iglesia oriental.

Debe tenerse en cuenta además que la promulgación de una ley fundamental contribuiría a disipar la confusión, mucho más frecuente de lo que pudiera pensarse, entre Código de Derecho Canónico y sistema normativo de la Iglesia. Prescindiendo ahora del Derecho Oriental, parece oportuno recordar —aunque la indicación parezca obvia— que el sistema normativo canónico nunca ha estado circunscrito a un Código, ni es posible que lo esté. En el momento actual, además del Código están vigentes en la Iglesia numerosas leyes especiales dictadas por la Santa Sede, multitud de normas de Derecho particular, costumbres, etc. Esta imprescindible pluralidad de fuentes del Derecho, a diversos niveles, probablemente tenderá a multiplicarse como consecuencia del proceso descentralizador a que abre paso el Concilio, mediante la vigorización de la Iglesia particular, el impulso dado a las conferencias episcopales y demás medidas dirigidas a adaptar la legislación a la diversidad de exigencias pastorales. Por tanto, la ley fundamental no podría estar constituida por unas normas concebidas en función de un Código, sino como la pieza

UNA LEY FUNDAMENTAL PARA LA IGLESIA

que dé unidad a todo el sistema normativo canónico, sea cual fuere la solución que se siga para la estructuración y sistematización de las leyes ordinarias.

PEDRO LOMBARDÍA